



MISIÓN PERMANENTE DE PANAMÁ
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ginebra, Suiza

MPPG/555-20

La Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales acreditados en Ginebra saluda atentamente a la Honorable Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y tiene el honor de remitir en adjunto las respuesta al cuestionario elaborado por la Sra. Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, en seguimiento a las resoluciones 16/ , 23/25, 32/19 y 41/17 del Consejo de Derechos Humanos intituladas “*Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas*”, en conformidad con su Nota, de fecha 9 de abril de 2020.

La Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales acreditados en Ginebra, aprovecha la oportunidad para reiterar a la Honorable Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las seguridades de su más alta consideración.

Ginebra, 26 de junio de 2020.



A la Honorable
OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Ginebra



*Secretaría General
Procuraduría General de la Nación*

Panamá, 19 de junio de 2020
PGN-SG-098-2020

Licenciada
Carmen I. Ávila O.
Directora General de
Organismos y Conferencias Internacionales
E.S.D.

Señora Directora:

Me dirijo a usted con ocasión a la copia de la nota No. DGOCI-DG-MIRE-2020-06711 fechada 13 de abril de 2020, remitida a la licenciada Jissel Maitín, entonces Secretaria Ejecutiva de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género, a través de la cual nos remite copia de la nota de 9 de abril de 2020, emitida por Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, contentiva del cuestionario en seguimiento a las resoluciones 16/7, 23/5, 32/19 y 41/17 del Consejo de Derechos Humanos, tituladas: "Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas", que según informa servirá de base para la presentación de su próximo informe temático que será presentado a la Asamblea General de la ONU.

En tal sentido, la licenciada Maruquel Castroverde, Secretaria de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Género del Ministerio Público, nos remite su opinión y nos ofrece sus aportaciones al cuestionario solicitado, que paso a indicar:

Definiciones y alcance de las disposiciones del derecho penal

- Proporcione información sobre la/s disposición/es sobre la violación o (o formas análogas de violencia sexual grave para aquellas jurisdicciones que no tienen clasificación de violación), proporcionando transcripciones y traducciones completas de los artículos relevantes del código penal y del código de procedimiento penal.**

R.:

Artículo 174. Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de cinco a diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder carnalmente en iguales condiciones. Se

impondrá la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca, con fines sexuales, cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital, en el ano o la vagina.

La pena será de diez a quince años de prisión, en cualesquiera de las siguientes circunstancias:

1. Cuando la violación ocasione a la víctima un trastorno psicológico limitante o impeditivo de su funcionalidad.
2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca incapacidad superior a treinta días.
3. Si la víctima quedara embarazada.
4. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera a cargo, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal.
5. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza.
6. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante observadores.
7. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios.

La pena será de doce a diesiocho años, si la violación la comete, a sabiendas de su situación, una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión sexual incurable o del virus de inmunodeficiencia adquirida.

Artículo 175. Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie violencia o intimidación, serán sancionadas con prisión de doce a diesiocho años si el hecho se ejecuta:

1. Con persona que tenga menos de catorce años de edad.
2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra causa, no pueda resistir el acto.
3. Abusando de su posición, con una persona que se encuentre detenida o confiada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro.
4. En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto".

2. Con base en el texto de esas disposiciones, por favor informe si la definición de violación es:

- Específica con relación al género, cubriendo solo a mujeres: NO
- Neutral en cuanto al género, abarcando a todas las personas: SI
- Basado en la falta de consentimiento de la víctima: SI
- Basado en el uso de fuerza o amenaza: SI
- Alguna combinación de lo anterior: SI
- ¿Cubre solo la violación vaginal?: NO

O.

- ¿Cubre todas las formas de penetración?: SI. Por favor, especifique: vaginal, anal, oro genital, también introduciendo dedos, mano, puños cerrados, objetos de diversa calidad y formas y animales.
 - ¿Se incluye explícitamente la violación conyugal en esta disposición?: NO.
 - ¿Se omite en la ley sobre violación conyugal?: NO.
 - La violación conyugal está cubierta en las disposición generales o por precedentes legales, incluso si no se incluye explícitamente?: SI
 - ¿Se excluye la violación conyugal en las disposiciones, o la violación conyugal no se considera un delito?: No se excluye. Es un delito.
3. ¿En qué medida la legislación de su país excluye la criminalización del perpetrador si la víctima y el presunto perpetrador viven juntos en una relación sexual/tienen una relación sexual/tuvieron una relación sexual?:
R.: No, en ninguna.
4. ¿Cuál es la edad legal para el consentimiento sexual?:
R.: Dieciocho (18) años. Sin embargo, entre parejas menores de edad ambos, queda sujeto el o la autora a medidas sicoeducativas, salvo en delitos más graves, como la violación puede llegar hasta 9 años, que es la máxima según el artículo 140, numeral 3 de la Ley 40 de 1999); podría ser mayor, si esta conducta concurre con otra igualmente punible, por vía del concurso real de delitos, por ejemplo, con un secuestro o un femicidio (la jurisprudencia no es uniforme en todo el país a este respecto todavía).
5. ¿Existen disposiciones diferentes para la actividad sexual entre adolescentes? Si es así, por favor proporcionelas.
R. En efecto, la Ley 40 distingue en su artículo 8, entre dos grupos etarios: entre 12 y 14 años que no hayan cumplido 15 años y entre 15 y 17 años que no hayan cumplido 18, que es cuando responden penalmente por sus actos punibles. En el primer grupo por estas conductas de comprobada vinculación, solo se les aplican medidas de re educación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
6. Proporcione información sobre las sanciones penales prescritas y su duración formas de violación criminalizadas.

R. La violación no calificada (art. 174 del Código Penal, primer y segundo párrafo), registra tres modalidades de consumación de la conducta: 1. Acceso carnal vía genitales; 2. Hacerse acceder (penetrar, vía anal o vaginal); 3. Actos sexuales orales (sin consentimiento de la víctima). El delito aquí conlleva pena de prisión de 7 a 12 años. En un cuarto párrafo, se contempla la violación con agravantes que genera una pena de 10 a 15 años. Finalmente, mismo artículo 174 del Código Penal, reprocha con sanción de 12 a 18 años de prisión, la violación perpetrada

por autor que con conocimiento de su enfermedad o condición de portador de una ETS incurable, o del VIRUS de INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA.

En el artículo 175 del Código Penal, se prevé una modalidad de la violación que sucede aun cuando no concurriera violencia ni intimidación como circunstancias vulneradoras de la libertad sexual de la víctima adulta o de la integridad sexual de aquella menor de edad, pues no está en capacidad de consentir o resistir el acto por diversos motivos (menor de 14 años; con abuso de autoridad, de confianza, está bajo custodia policial; la une al perpetrador un vínculo de parentesco; padece discapacidad mental o sensorial, por su edad, o cualquier otro motivo equivalente, no pueda ejercer el derecho a la libertad sexual, consentir o negarse).

7. ¿Qué proporciona la legislación de su país en términos de reparación a la víctima de violación y/o violencia sexual después de la condena del autor?.

R.: La sentencia se constituye en título ejecutivo para reclamar por vía civil la reparación que estime de lugar, pero también durante el proceso penal, la víctima puede designar un defensor público pagado por el Estado y éste presentar una Querella mediante la cual reclama resarcimiento del daño que le ha sido causado con el delito, a título de reparación. El Estado no se hace cargo de reparación a las víctimas de violación. Esta es responsabilidad derivada del delito por el que el acusado ha sido encontrado culpable mediante una sentencia firme y ejecutoriada. En esa condición, debe responder a la acción civil resarcitoria pedida con la querella penal o ante la jurisdicción civil.

➤ **Circunstancias agravantes y atenuantes**

8. ¿La Ley prevé circunstancias agravantes al condenar los casos de violación? Si es así, ¿cuáles son?.

R.: Sí, se leen en transcripción de artículos 174 y 175 del Código Penal, arriba.

- a. **¿Es la violación por más de un perpetrador una circunstancia agravante?:** Sí. Artículo 174, numeral 6. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante observadores.
- b. **La violación de un individuo particularmente vulnerable es una circunstancia agravante o el desequilibrio de poder entre el presunto autor y las víctimas (por ejemplo, médico/paciente; maestro/alumno; diferencia de edad):** Sí. Artículo 175, numerales 1 a 4.
- c. **¿La violación por parte del cónyuge o pareja íntima es una circunstancia agravante?:** Sí. Artículo 174, numerales 4 (pariente cercano por afinidad, si estuvieran casados o constituyen pareja como tal al tenor del artículo 200 del Código Penal) y 5, cuando se cometiera con abuso de confianza.

○.

9. ¿La Ley prevé circunstancias atenuantes a los efectos del castigo?

R. Sí. En caso afirmativo, explique. En efecto, aquellas denominadas “comunes” que vienen previstas en el artículo 90 del Código Penal y que se transcriben a continuación:

- “1. Haber actuado por motivos nobles o altruistas.**
- 2. No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo.**
- 3. Las condiciones físicas o síquicas que colocaron al agente en situación de inferioridad.**
- 4. El arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias.**
- 5. La colaboración efectiva del agente.**
- 6. Haber cometido el delito en condiciones de imputabilidad disminuida.**
- 7. Cualquier otra circunstancia no pre establecida por la ley que, a juicio del Tribunal deba ser apreciada”.**

En nuestra experiencia, las atenuantes que ha sido reconocidas en casos de violación son aquella contemplada en el numeral 4, casos de sangrado profuso o hemorragia genital y el perpetrador le ha prestado auxilio llevándola a un centro médico. Habrá quienes digan que ponerse un preservativo al violar a una persona es una forma de disminuir o intentar disminuir las consecuencias del acto. Por vía jurisprudencial no conozco de ningún fallo en el país en ese sentido, más bien podría plantearse, principalmente si el sujeto conoce es portador o está enfermo de una ETS incurable o es positivo en HIV. Sobre la colaboración efectiva podría ser aplicada cuando tuviésemos un caso de asalto sexual en grupo y necesitamos las autoridades conocer la identidad de todos quienes hubieran participado, incluso estado presentes como observadores, con ello contribuyendo a aumentar el ambiente de intimidación ambiental que representa el grupo que bien ella o él pueden imaginar le van a agrede sexualmente por “turnos”. Sobre la imputabilidad disminuida, ciertamente se aplica en casos donde el sujeto se ha drogado, embriagado más no deliberadamente con ello, determinado o premeditando violaría a nadie. Es controversial la figura. Podría ser una persona con discapacidad intelectual, cuyo libido esté exacerbado y ante la carencia de sus medicamentos, caer en un estado de excitación descontrolada, llegando a violar a quien estuviera a su alcance. Finalmente, solía invocarse el numeral 7 para las personas sin antecedentes penales, empero, bajo el sistema penal acusatorio vigente, ésta ya no es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal del acusado, por tanto, no le reportaría la reducción en la pena de que trata el artículo 92 del Código Penal.



10. ¿Se permite la reconciliación entre la víctima y el perpetrador como de una respuesta legal? Si es así, ¿en qué etapa y cuáles son las consecuencias?

a. Independientemente de la ley, se permite la reconciliación en la práctica?. ¿Cuál es la práctica al respecto?. Seguido, explicamos.

R.: SI se permite la reconciliación entre dos adultos, víctima y victimario, más bien la ley no puede prohibirlo, es parte del derecho de toda persona a la autonomía de la voluntad. Empero, no se reconoce a tal manifestación de reconciliación ningún efecto legal sobre el cargo de violación imputado/acusado o probado al autor.

La reconciliación entre victimario y víctima no hace parte del catálogo de atenuantes generales, tampoco el perdón. La atenuante del arrepentimiento (art.90, numeral 4), por ejemplo, demanda del autor acciones tendentes a disminuir el daño causado de inmediato o al menos intentarlo para que justifique una rebaja de la pena a que se hiciera acreedor en juicio el acusado, como ya lo explicamos antes).

En la práctica, podríamos conceder que ocurrida una violación, podríamos pensar que si la víctima ha sido golpeada o maltratada físicamente, causándole grave hemorragia en sus genitales, el imputado a sabiendas que puede morir, la lleva a un hospital. Ahí la deja en urgencias y se marcha. Esta conducta podría tratarse de una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal del acusado en que igual tendrá que enfrentar el juicio a menos que celebre un acuerdo de pena con la Fiscalía. Más si la víctima, que hubiera sido su amiga o su pareja, violada, expresa a las autoridades competentes que lo ha perdonado y se han reconciliado, esta sola manifestación no produce ningún efecto sobre el proceso impeditivo de su curso para llevar al presunto autor del delito hasta el juicio. Incluso si en este escenario, aceptara los hechos cometidos en perjuicio de la víctima, llegara a declararse arrepentido y le ofreciera alguna suma de dinero en resarcimiento, bien puede aspirar a una fórmula anticipada de terminación del proceso, como ya adelantamos, del Acuerdo de Pena (art. 220 del Código Procesal Penal), mediando para ello, una negociación con la Fiscalía, debidamente representado en sus intereses, por la defensa. Este acuerdo de pena puede representarle una reducción de hasta 1/3 de la pena que le tocaría enfrentar de haber sido vencido su estado de inocencia en el debate oral. No obstante, no lo exonerá de la condena, en su récord penal queda registrado el antecedente por violación y la pena a la que fue sentenciado, generalmente de prisión.

Es menester aclarar que en Panamá existen penas sustitutivas a la principal como el trabajo comunitario (artículo 50, numeral 2), aplicable hasta en casos de violación con pena de prisión no mayor de 5 años cuando la víctima es mayor de edad, pero esta decisión es potestad del Juez de Cumplimiento. No es legalmente viable lo conceda, en casos de delitos sexuales con víctimas menores de edad desde la Ley 21 de 20 de marzo de 2018. (art. 2 que modifica artículo 65 del Código Penal).

11. ¿Existe alguna disposición en el Código Penal que permita el no enjuiciamiento del perpetrador?. En caso afirmativo, especifique.

- a. **¿Si el autor se casa con la víctima de violación?. NO.**
- b. **Si el autor pierde su “carácter socialmente peligroso” o se reconcilia con la víctima.** Cabe aclarar que de la calidad de “socialmente peligroso” no depende una condena o el veredicto de no culpabilidad en juicio. Depende de las pruebas que hayan podido evadirse ante el Tribunal de Juicio cumplidos los principios del juicio oral. De ahí que es “NO” la respuesta para ambos supuestos planteados en este numeral (tema de la reconciliación ya lo abordamos antes).

Sin embargo, solo y si el imputado/acusado fuera declarado inimputable cuando cometió el delito (cfr. Art. 38: “Actúa con imputabilidad disminuida quien, en el momento de la acción u omisión, no posea completa capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho) o deviniera en inimputable durante el proceso por alguna patología mental sobreviniente, dictaminada así por psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, se le enjuicia igual pero siempre con la compañía de un curador y su defensa. De ser comprobada su culpabilidad, el Juez le aplica una medida de seguridad en un Hospital de Salud Mental por el tiempo que tome su tratamiento, teniendo periódicamente su médico de cabecera que enviar informes al Tribunal de la causa sobre su estado. Una vez que lo diera de alta podría considerarse su liberación de la cárcel. En nuestra experiencia, los perpetradores permanecen intramuros de los sanatorios mentales por años. Si es absuelto, es liberado sin embargo, sabemos que el riesgo que implica para el curador es grave y generalmente este busca plantear un proceso de interdicción para recluirlo en un hospital de salud mental.

Enjuiciamiento

12. ¿Se procesa la violación denunciada a la policía ex oficio? (enjuiciamiento público)?

R: SI. La investigación de una violación puede iniciar hasta con una llamada telefónica anónima, pero es indispensable contar con la víctima en la etapa preliminar, donde se requiere su relato, salvo que hayan testigos presenciales y ella no estuviera en condiciones de hablar sobre lo ocurrido. Esta persona debe ser sometida a exámenes médicos forenses (en clínica y sicología forense), pasa por la Unidad de Atención a Víctimas, Testigos y demás intervenientes, donde hay una sicóloga clínica para darle la contención en crisis si fuera necesario. Su presencia y colaboración son críticas para la aprehensión del sujeto señalado presunto autor del delito o del término de 24 horas, lo mismo que para que la Fiscalía pida la aplicación de la medida cautelar más severa, que lo es la detención provisional, por considerarla necesaria, proporcional y razonable al delito que se le atribuye como considerando los peligros procesales, de evasión del proceso, de destrucción de potenciales pruebas, como para prevenir cometa en libertad otros ataques a la integridad de la víctima y testigos.

O.

13. Se procesa la violación denunciada a la policía ex parte?

R.: SI. No obstante, debemos aclarar que tanto en el supuesto anterior como en este, lo actuado por la Policía como primer interveniente, si fuera el caso, pasa al término de la distancia (tiene 24 horas pero debe hacerlo, cuanto antes), a la Fiscalía, que es la autoridad competente para que se judicialice el caso y se reconozca al perpetrador todos sus derechos y garantías constitucionales y legales, oportunamente, también dentro del término fatal de 24 horas (la práctica es que lo haga en alrededor de 7-8 horas, lo mismo, cuanto antes).

14. ¿Se permite el acuerdo de culpabilidad o “solución amistosa” en casos de violación de mujeres? R.: NO.

15. ¿Se permite el acuerdo de culpabilidad o “solución amistosa” en casos de violación de niños y niñas?

R.: NO. En la jurisdicción de adolescentes, la Ley 40 permite medidas re educativas, como ya se ha indicado, incluso cuando ha ocurrido entre parientes y la edad del adolescente perpetrador es menor de 14 años.

16. Proporcione información sobre el estatuto de limitaciones para enjuiciar la violación.

R.: El Código Penal se refiere a la prescripción de la acción penal en el artículo 116 del Código Penal. Se establece que prescribe para delitos con pena de prisión en un plazo igual al máximo al de la pena que corresponde al delito. Sin embargo, para contar el inicio del plazo de que trata dicha norma en lo que concierne a delitos sexuales contra menores de edad, el artículo 119, segundo párrafo, establece que esto ocurrirá a partir del momento en que alcancen la edad de 18 años.

En estos momentos, se tiene pendiente de discusión en la Asamblea Nacional, una iniciativa de ley que causará que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean imprescriptibles.

17. Cuáles son las disposiciones que permiten a un niño o niña que fue víctima de violación denunciarlo después de llegar a la edad adulta, si corresponde?

R. El artículo 119 del Código Procesal Penal, segundo párrafo, prevé: “En los delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual, establecidos en el Título III del Libro Segundo del Código Penal, cuando la víctima sea menor de edad, el término de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que la víctima cumpla la mayoría de edad”.

18. ¿Existen requisitos obligatorios para la prueba de violación, como evidencia médica o la necesidad de testigos? En caso afirmativo, especifique.

R.: Aun cuando no existen en nuestro ordenamiento jurídico patrio, el sistema de la prueba tasada, aun bajo el de la libertad probatoria (art. 376 del Código Procesal Penal), subsiste la necesidad de contar con el relato de la víctima que tratándose generalmente de única prueba testimonial de cargo, por la clandestinidad con que suelen cometerse estos delitos, debe estar acompañada por prueba periférica o de corroboración. Los jueces aplican el denominado "Triple Test". Su origen más conocido viene de la jurisprudencia española e implica que el relato de la víctima debe ser verosímil, desprovisto de incredibilidad subjetiva y persistente en su contenido de incriminación contra el perpetrador. Por tanto. Dicha prueba periférica la suele constituir la evaluación médica ginecológica forense, la evaluación sicológica forense, el informe de la sicóloga clínica de la Unidad de Víctimas, Testigos e Intervinientes.

19. ¿Existen disposiciones de protección en casos de violación destinadas a evitar que los jueces y los abogados defensores expongan la historia sexual de una mujer durante el juicio?

R. No existen disposiciones que expresamente lo veden en el derecho interno, pero contamos con el Estatuto de Roma, vinculante no solo porque es Ley de la República desde 2002, cuyo artículo 68 establece: "La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos.".

Por lo expuesto y por mandato del artículo 4 ("La República de Panamá acara las normas de Derecho Internacional" y del 17, segundo párrafo, de la Constitución Política del país ("Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona", todo los agentes del Estado, específicamente al caso de esta pregunta, estamos obligados a guardar en estricta confidencialidad todo cuanto sea necesario para salvaguardar la vida privada de la víctima cuando la información no hace parte nuclear del componente fáctico de la acusación de la Fiscalía.

Es por vía del control horizontal, esto es, de las objeciones que formula la Fiscalía ante las preguntas de la defensa en ese sentido que se podrían evitar las invasiones a la intimidad de la vida privada de la víctima no pertinentes a la discusión de los hechos del caso (art. 397 del Código Procesal Penal: "Quien preside moderará el interrogatorio, evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas"). Lo mismo, por vía de incidencias, antes del desahogo probatorio, debidamente fundamentadas y basadas en la norma supranacional, los Fiscales conociendo de una prueba ilegal admitida previamente por el Juez de Garantías que violenta la intimidad de la víctima y no es pertinente a los fines del proceso, denunciarla como tal e insistir sea excluida o durante el debate, intentar una más vigilante protección de los derechos de la víctima a su dignidad personal, cuando la defensa está

O.

siguiendo una línea de interrogatorio dirigida a descubrir aspectos de la intimidad de esta persona que por ajenos a los hechos del caso en debate, es claro buscan descompensarla, avergonzarla para finalmente desacreditarla como testigo de cargo (artículo 397 del Código Procesal).

En nuestro sistema procesal penal, los jueces no interrogan a la víctima sobre los hechos del caso.

20. ¿Existen disposiciones de derecho procesal penal para evitar la revictimización durante el enjuiciamiento y las audiencias judiciales?

R.: SI. El artículo 391 del Código Procesal Penal prevé, por ejemplo, claramente el uso del circuito cerrado o de la cámara Gesell al referirse al testimonio de una persona en condición de vulnerabilidad o cuando se trata de un menor de edad. Igualmente, se han practicado estos testimonios bajo la figura del anticipo jurisdiccional de la prueba (art. 279 del Código Procesal Penal), para evitar que la víctima deba comparecer al juicio, que suele tomar lugar alrededor de un año después de la denuncia, sin duda más ajustada a su realidad y la del proceso, tal como atinadamente lo advierten las Reglas de Brasilia en su actualización de abril de 2018.

Guerra y/o conflicto a

21. ¿Se tipifica la violación como crimen de guerra o crimen de lesa humanidad?:

R.: SI, en artículo 441, numeral 7 contemplado bajo el Título IV, “Delitos Contra la Humanidad”, Capítulo I “Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

22. ¿Existe un estatuto de limitaciones para el enjuiciamiento de violaciones en la guerra o en contextos de conflicto?:

R: No. Estos delitos son imprescriptibles en virtud de mandato expreso del artículo 121 del Código Penal.

23. ¿Existen disposiciones explícitas que excluyan los estatutos de limitación para las violaciones cometidas durante la guerra y los conflictos armados?:

R.: SI, como se indicó antes, artículo 121 del Código Penal que a la letra señala: “No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de desaparición forzada de personas”.

24. ¿Se ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)?:

R.: SI, ha sido promulgado en Gaceta Oficial 24512 que promulga la Ley 14 del 13 de marzo de 2002 con sus posteriores modificaciones.

DATOS

25. Sírvase proporcionar datos sobre el número de casos de violación denunciados, procesados y sancionados durante los 2 a 5 años.

(ver anexos A y B)

OTROS

26. Sírvase explicar las barreras particulares y adicionales a la denuncia y el enjuiciamiento de violaciones y la responsabilidad de los autores en su contexto legal y social no cubiertas por lo anterior.

R. El sistema no ha interiorizado el estándar de debida diligencia reforzada en estos casos, que es obligación de todos los agentes del Estado observarlo desde el inicio de la investigación en la recepción de la denuncia por la vía que sea. Las etapas del proceso se suceden una tras otra, sin aplicar sesuda y sensiblemente la perspectiva de género y niñez, que en estos casos de violaciones requeriría como mínimo, la inmediata implementación de la prueba anticipada del testimonio de la víctima sea adulta o menor de edad, para evitar la victimización secundaria que se da a consecuencia de la constancia re visitación a las experiencias del delito, que debe soportar porque es constante el riesgo de que llegue al juicio sin haber generado información “creíble”, que “convenza”, porque de frente a quien acusa, será presumida mendaz, él inocente y debe hacer cuando esté a su alcance para que le crean. Generalmente cuando sale del juicio, si llega hasta allá, va con las manos vacías de reparación digna y transformadora a hacerse el cargo del resto de su vida intentando olvidar porque los servicios asistenciales que provee el Estado dependen en gran medida de que tenga un seguro social, si lo paga o lo pagan sus padres, caso que no, la terapia tiene un costo en un centro de salud amontonado de pacientes que acuden por todas las razones inimaginables, ya que la discriminación en positivo para estas víctimas es un pendiente no uniformado por políticas de salud públicas comprometidas por adoptar estas medidas de cuidado mínimas para las y los sobrevivientes de violencia sexual. Tampoco su reinserción escolar está asegurada, cuando son menores de edad, en el área donde han tenido que mudarse si el perpetrador está en libertad bajo medida cautelar distinta a la detención provisional durante el proceso, o, ha sido amenazada en el barrio por sus familiares que saben dónde vive. La Policía no cuenta con recursos suficientes para asumir la responsabilidad de cuidar a víctimas y testigos amenazados de muerte hasta llegar al juicio. La Fiscalía tampoco cuenta con recursos para esto. De ahí que estamos promoviendo que se adopten medidas de seguimiento de tales medidas de protección más periódicas para que no venzan a los 6 meses y que las/los Fiscales mantengan la comunicación como los

sicólogos de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, como demás intervenientes (UPAVIT), hagan un esfuerzo adicional para siquiera a través de llamadas telefónicas hagamos en equipo el acompañamiento y no se sientan, como de hecho, lo expresan, aprovechadas para los primeros relatos y exámenes médico forenses y luego, olvidadas para solo recordarles que ha concluido el término de la investigación y se pasa a la etapa intermedia donde se va a acusar al perpetrador o que por ser la prueba insuficiente no se pasará y promoveremos el sobreseimiento del proceso, o se hará un acuerdo de pena y se le dirá de cuántos años de prisión con o sin reemplazo por otra menos severa, como el trabajo comunitario si la víctima es mayor de edad. Es menester señalar, que al tenor del artículo 220 del Código Procesal Penal, los acuerdos de pena se celebran entre el perpetrados con su defensa y la Fiscalía, no es vinculante la opinión de la víctima a quien se la debe informar, pero hasta ahí. Otra barrera para cumplirle a las víctimas sus derechos en el proceso, es la vulnerabilidad en que se halla por ejemplo, quien es parte de un grupo étnico minoría o es de identidad de género diverso. El principio de igualdad que prevé que en igualdad de condiciones en la realidad te corresponde igualdad ante la ley, en tratamiento y respuesta, no se cumple; tampoco el principio de no discriminación y con absoluto respeto a la dignidad personal de todas las partes en el proceso, no solo para el acusado sino para quien lo acusa, con todos los riesgos que implica hacerlo ante un público de extraños que lo son todos los convocados a participar en la investigación, médicos, sicólogos, peritos de criminalística, intervenientes por la contraparte, la Fiscalía, la defensa, la querella, los Jueces de Garantía y del Tribunal de Juicio, de Apelaciones si allá se llegara y hasta de Casación si se intentara este recurso extraordinario contra la sentencia.

Atentamente,


Delia A. De Castro D.
Secretaria General



DADD/cv
Adjunto lo indicado.

Questionnaire "Expediting efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" - Note DGOCI-DG-MIRE-2020-06711 of the Directorate of International Organizations and Conferences of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Panama, sent by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences.

- **Questionnaire on the criminalization and prosecution of rape**

Definitions and scope of criminal law provisions

1. Provide information on the provision(s) on rape or (or similar forms of serious sexual violence for those jurisdictions that do not have a rape classification) by providing complete transcripts and translations of the relevant articles of the penal code and code of criminal procedure.

Article 174. Anyone who, by means of violence or intimidation, has carnal knowledge of a person of either sex, using his or her genital organs, shall be liable to imprisonment for a term of five to ten years. This penalty shall also be imposed on anyone who makes himself or herself carnally available on equal conditions. The same penalty shall be imposed on anyone who, without the consent of the person concerned, performs oral sex on him or her or inserts, for sexual purposes, any object or part of his or her non-genital body in the anus or vagina.

The penalty shall be ten to fifteen years' imprisonment in any of the following circumstances:

1. When the rape causes the victim a psychological disorder that limits or prevents his or her functionality.
2. When the act causes the victim physical damage that results in a disability of more than thirty days.
3. If the victim becomes pregnant.
4. When the perpetrator is a minister of worship, educator or is in charge, in any capacity, of his or her custody, upbringing or temporary care.
5. If the act is committed with abuse of authority or trust.
6. When the act is committed with the assistance of two or more persons or before observers.
7. When the sexual access is made using denigrating or humiliating means.

The penalty shall be twelve to eighteen years, if the rape is committed with knowledge of the situation by a person who is ill or is a carrier of an incurable sexually transmitted disease or acquired immune deficiency virus.

Article 175: The conduct described in the preceding article, even if it does not involve violence or intimidation, shall be punishable with imprisonment of twelve to eighteen years if the act is committed:

1. With a person under fourteen years of age,
2. With a person who is deprived of reason or sense or who has a physical or mental disability that prevents him or her from consenting or who, for any other reason, cannot resist the act.
3. By abusing his or her position, with a person who is in custody or entrusted to the perpetrator to take custody of him or her or carry him or her from one place to another.
4. In a person who, because of his or her age, cannot consent to or resist the act".

2. Based on the text of these provisions, please inform whether the definition of rape is:

- Gender-specific, covering only women: NO
- Gender-neutral, covering all people: YES
- Based on the victim's lack of consent: YES
- Based on the use of force or threat: YES
- Any combination of the above: YES
- Does it only cover vaginal rape?: NO
- Does it cover all forms of penetration? YES. Please specify: vaginal, anal, orogenital, also introducing fingers, hand, closed fists, objects of different quality and shapes and animals.
- Is marital rape explicitly included in this provision: NO.
- Is marital rape omitted from the law? NO.
- Is marital rape covered in the general provisions or by legal precedent, even if it is not explicitly included? YES.
- Is marital rape excluded in the provisions, or is marital rape not considered a crime: It is not excluded. It is a crime.

3. To what extent does your country's legislation exclude the criminalization of the perpetrator if the victim and the alleged perpetrator live together in a sexual relationship/have a sexual relationship/have had a sexual relationship??

A.: NO, to no extent.

4. What is the legal age of sexual consent? 18 years. However, among both partners who are minors, the perpetrator is subject to psychoeducational measures, except in more serious crimes, such as rape, which can reach up to 9 years, which is the maximum according to Article 140, paragraph 3 of Law 40 of 1999); it could be longer, if this conduct is concurrent with

another equally punishable offence, by way of actual concurrence of offences, for example, kidnapping or femicide (case law is not yet uniform throughout the country in this regard).

5. Are there different provisions for sexual activity among adolescents? If so, please provide them. Article 8 of Law 40 distinguishes between two age groups: between 12 and 14 years old who have not turned 15 and between 15 and 17 years old who have not turned 18, which is when they are criminally liable for their punishable acts. In the first group, because of these proven behaviors, social reeducation measures are applied only under the supervision of the National Secretariat for Children, Adolescents, and the Family.
6. Provide information on prescribed criminal sanctions and their duration criminalized forms of violation.

Unqualified rape (art. 174, first and second paragraphs, of the Penal Code) records three modes of consummation of the conduct: 1. Carnal access via the genitals; 2. Making themselves accessible (penetration, anal or vaginal); 3. Oral sex acts (without the victim's consent). The crime here carries a prison sentence of 7 to 12 years. In a fourth paragraph, aggravated rape is contemplated and carries a penalty of 10 to 15 years. Finally, the same article 174 of the Penal Code, punishes with a penalty of 12 to 18 years of imprisonment, rape committed by a perpetrator who with knowledge of his or her illness or condition of being a carrier of an incurable STD, or of the VIRUS OF IMMUNE DEFICIENCY ACQUIRED. [S/C]

Article 175 of the Penal Code provides for a mode of rape that occurs even when there is no violence or intimidation as circumstances violating the sexual freedom of the adult victim or the sexual integrity of the minor, since he or she is not able to consent to or resist the act for various reasons (under 14 years of age; with abuse of authority, of trust, is in police custody; is related to the perpetrator; has a mental or sensory disability, because of his or her age, or any other equivalent reason, is unable to exercise the right to sexual freedom, to consent or to refuse.

7. What does the law in your country provide in terms of reparation to the victim of rape and/or sexual violence after the conviction of the perpetrator?

A.: The sentence is constituted as an enforceable instrument to claim by civil means the reparation that it considers appropriate, but also during the criminal process, the victim can designate a public defender paid by the State and this person can present a Complaint by means of which he or she claims compensation for the damage that has been caused to the victim as a result of the crime, by way of reparation. The State does not provide reparation to victims of rape. This is responsibility derived from the crime for which the accused has been found guilty by a final and enforceable sentence. In this condition, he or she must respond to the civil action for reparation requested with the criminal complaint or before the civil jurisdiction.

➤ **Aggravating and mitigating circumstances**

8. Does the Law provide for aggravating circumstances when sentencing rape cases? If so, what are they?

A.: YES, they are read in transcription of articles 174 and 175 of the Penal Code, above.

a. **Is rape by more than one perpetrator an aggravating circumstance?** YES. Article 174, paragraph 6. When it is committed with the participation of two or more persons or before observers.

b. **The rape of a particularly vulnerable individual is an aggravating circumstance or the imbalance of power between the alleged perpetrator and the victims (e.g. doctor/patient; teacher/student; age difference):** YES. Article 175, paragraphs 1 to 4.

c. **Is rape by a spouse or intimate partner an aggravating circumstance?** YES. Article 174, paragraph 4 (close relative by affinity, if they are married or constitute a couple as such within the meaning of article 200 of the Penal Code) and 5, when committed with abuse of trust.

9. ¿Does the Law provide for mitigating circumstances for the purposes of punishment? Yes. If so, please explain. In fact, those so-called "common" circumstances which are provided for in article 90 of the Penal Code and which are transcribed below:

"1. Having acted for noble or altruistic reasons.

- 2. Not having had the intention of causing harm of such gravity as that which occurred.**
- 3. The physical or psychological conditions that placed the agent in an inferior position.**
- 4. Repentance, when by acts subsequent to the execution of the action, the agent has diminished or tried to diminish its consequences.**
- 5. The effective collaboration of the agent.**
- 6. Having committed the crime in conditions of diminished illegal liability.**
- 7. Any other circumstance not preestablished by law which, in the opinion of the Court, should be appraised".**

A. In our experience, the mitigating factors that have been recognized in cases of rape are those referred to in paragraph 4, cases of profuse bleeding or genital hemorrhage, and the perpetrator has provided assistance by taking him or her to a medical center. Some may say that wearing a condom when raping a person is a way of lessening or trying to lessen the consequences of the action. I do not know of any case law in the country in this regard, but it could be considered, mainly if the subject is known to be a carrier or sick with an incurable STD or is HIV positive. Regarding effective collaboration, it could be applied when we have a case of sexual assault in a group and the authorities need to know the identity of all those who have participated, even if they were present as observers, thus contributing to increase the environment of environmental intimidation that represents the group that he or she can imagine will sexually assault him or her by "turns". On diminished legal liability, it certainly applies in cases where the subject has been drugged or drunk, but not deliberately thereby, would determinedly or premeditatedly rape anyone. This is a controversial figure. It could be a person with intellectual disability, whose libido is exacerbated and in the absence of his or her medication, fall into a state of uncontrolled excitement, even raping whoever is within his or her reach. Finally, number 7 used to be invoked for people without criminal records, however, under the current accusatory penal system, this is no longer a mitigating circumstance for the criminal responsibility of the accused, therefore, the reduction in the sentence referred to in article 92 of the Penal Code would not be applicable to him or her.

10. Is reconciliation between victim and perpetrator allowed as a legal response? If so, at what stage and what are the consequences?

a.) Regardless of the law, is reconciliation allowed in practice? What is the practice in this regard? We will explain below.

A.: Reconciliation between two adults, victim, and victimizer, is permitted, rather the law cannot prohibit it, it is part of every person's right to autonomy of will. However, no legal effect on the count of rape charged/accused or proven to the perpetrator is recognized to such a manifestation of reconciliation.

Reconciliation between victim and offender is not part of the general catalogue of mitigating factors, nor is forgiveness. The mitigating circumstance of repentance (art. 90, paragraph 4), for example, demands that the perpetrator take action to diminish the damage caused immediately or at least try so that a reduction of the penalty that the accused would face in court can be justified, as we explained earlier).

In practice, we could concede that if a rape has occurred, we could think that if the victim has been beaten or physically abused, causing serious bleeding from his or her genitals, the accused knowing that he or she may die, takes him or her to a hospital. There the accused drops him or her off at the emergency room and leaves. This conduct could be a circumstance modifying the criminal responsibility of the accused in that he or she will still have to face trial unless he or she enters into a plea agreement with the Prosecutor's Office. Even more so if the victim, who had been his or her friend or partner, who was raped, expresses to the competent authorities that he or she has been forgiven and they have reconciled, this single manifestation does not produce any effect on the process of impeding its course to take the presumed perpetrator of the crime to trial. Even if, in this scenario, he or she accepts the acts committed to the detriment of the victim, declares remorse and offers some amount of money in compensation, he or she may well aspire to an early termination of the process, as we have already mentioned, in the Plea Agreement (art. 220 of the Code of Criminal Procedure), through negotiation with the Public Prosecutor's Office, duly represented in his or her interests, by the defence. This plea agreement may represent a reduction of up to 1/3 of the sentence that the accused would face if his or her state of innocence had been overcome in the oral proceedings. However, it does not exonerate him or her from the sentence, in his or her criminal record, the antecedent for rape and the sentence to which he or she was convicted, generally that of prison, are recorded..

It should be made clear that in Panama there are alternative penalties to the main one, such as community work (article 50, paragraph 2), which is applicable even in cases of rape with a prison sentence of not more than 5 years when the victim is of legal age, but this decision is within the power of the Compliance Judge. It is not legally feasible to grant it, in cases of sexual crimes with minor victims since Law 21 of March 20, 2018. (art. 2, amending article 65 of the Penal Code).

11. Is there any provision in the Criminal Code that allows for non-prosecution of the perpetrator? If so, please specify.

- a. If the perpetrator marries the rape victim? NO.
- b. If the perpetrator loses his or her "socially dangerous character" or reconciles with the victim. It should be clarified that a conviction or a not-guilty verdict at trial does not depend on the quality of "socially dangerous". It depends on the evidence that could have been produced before the trial court in compliance with the principles of the oral proceedings. Hence, the answer to both of the assumptions raised in this section is "NO" (we have already addressed the issue of reconciliation above).

However, only if the indicted/accused is declared legally not liable when he or she committed the crime (cf. Article 38: "Any person who, at the time of the act or omission, does not have full capacity to understand the unlawful nature of the act, acts with diminished liability) or becomes legally not liable during the proceedings for any mental pathology, as determined by a forensic psychiatrist from the Institute of Legal Medicine, is prosecuted in the same way but always in the company of a *guardian ad litem* and his or her defence. If guilt is proven, the judge applies a security measure in a Mental Health Hospital for the time that his or her treatment takes, having periodically his or her family doctor to send reports to the Court about his or her condition. Once discharged, his or her release from prison may be considered. In our experience, perpetrators remain within the walls of mental health facilities for years. If acquitted, he or she is released, however, we know that the risk he or she poses to the *guardian ad litem* is serious and the *guardian ad litem* usually seeks to bring a restraining order against him or her in a mental health hospital.

Trial

12. Is the rape reported to the police ex officio? (public trial)?

A:: YES. The investigation of a rape can begin with an anonymous phone call, but it is essential to involve the victim in the preliminary stage, where his or her account is required, unless there are eyewitnesses and he or she is not in a position to talk about what happened. This person must undergo forensic medical examinations (in clinical and forensic psychology), go through the Victims,

Witnesses and Other Intervention Unit, where there is a clinical psychologist to provide crisis support if necessary. His or her presence and collaboration are critical for the apprehension of the subject identified as the alleged perpetrator of the crime or within 24 hours, as well as for the Prosecutor's Office to request the application of the most severe precautionary measure, which is provisional detention, as it is considered necessary, proportional and reasonable to the crime attributed to him or her, as well as considering the dangers of the proceedings, of evasion of the process, of destruction of potential evidence, as well as to prevent other attacks on the integrity of the victim and witnesses from being committed at liberty.

13. Is the rape reported to the police processed ex parte?

A.: YES. However, we must clarify that both in the previous case and in this one, the actions of the police as the first party, if applicable, as a matter of time allowed for appearance (they have 24 hours but must do so as soon as possible), are transferred to the Public Prosecutor's Office, which is the competent authority for prosecuting the case and recognizing the perpetrator's constitutional and legal rights and guarantees, also within the absolute time limit of 24 hours (the practice is that this is done in about 7-8 hours, likewise, as soon as possible).

14. Is a plea agreement or "friendly settlement" allowed in cases of rape of women? A.: NO.

15. Is a plea agreement or "friendly settlement" allowed in cases of child rape?

A.: NO. In the jurisdiction of adolescents, Law 40 allows for re-educational measures, as already indicated, even when it has occurred between relatives and the age of the adolescent perpetrator is under 14.

16. Provide information on the statute of limitations for prosecuting rape.

A.: The Penal Code refers to the statute of limitations for criminal proceedings in article 116 of the Penal Code. The statute of limitations is set for crimes punishable by imprisonment for a period of time equal to the maximum penalty for the crime. However, in order to start the period covered by this rule with regard to sexual offences against minors, article 119, second paragraph, provides that this shall occur from the time they reach the age of 18.

At the moment, a law initiative is pending in the National Assembly that will make sexual crimes against minors imprescriptible.

17. What are the provisions that allow a child who was a victim of rape to report it after reaching adulthood, if applicable?

A. Article 119 of the Code of Criminal Procedure, second paragraph, provides: "In crimes Against Sexual Freedom and Integrity, established in Title III of Book Two of the Penal Code, when the victim is a minor, the term of the prescription shall commence on the date on which the victim reaches the age of majority".

A.: The Penal Code refers to the statute of limitations for criminal proceedings in article 116 of the Penal Code. It states that the statute of limitations for crimes punishable by imprisonment, such as rape, is equal to the maximum term of the sentence corresponding to the crime (depending on the factual circumstances of the case, we have to start counting from the basic penalty of 174 of the Penal Code, 8 years; for aggravated rape, 10 years, for that referred to in article 175, 12 years. At this moment, in second debate, a draft law is being discussed in the National Assembly that will cause sexual crimes committed against minors not to be prescribed.

18. Are there mandatory requirements for rape testing, such as medical evidence or the need for witnesses? If yes, please specify.

A.: Although our national legal order does not have a system of assessed evidence, even under the system of probation (article 376 of the Code of Criminal Procedure), there is still a need for the victim's account, which, because of the clandestine nature of the crimes committed, must be accompanied by peripheral or corroborative evidence. Judges apply the so-called "Triple Test". Its most well-known origin comes from Spanish jurisprudence and implies that the victim's account must be credible, devoid of subjective incredibility and persistent in its content of incrimination against the perpetrator. Therefore. Such peripheral evidence is usually constituted by the medical gynecological forensic evaluation, the forensic psychological evaluation, the report of the clinical psychologist of the Victims, Witnesses, and Interveners Unit.

19. Are there protective provisions in rape cases designed to prevent judges and defence lawyers from exposing a woman's sexual history during the trial?

A. There are no provisions that expressly prohibit this in domestic law, but we have the Rome Statute, which is binding not only because it has been a law of the Republic since 2002, article 68 of which establishes: "The Court

shall take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses. ...".

Under article 4 ("The Republic of Panama shall abide by the rules of international law") and the second paragraph of article 17 of the Constitution ("The rights and guarantees enshrined in this Constitution shall be regarded as minimal and not exclusive of others that affect the fundamental rights and dignity of the individual"), all State agents, specifically in the case of this question, are obliged to keep strictly confidential everything necessary to safeguard the victim's privacy when the information does not form a core part of the factual component of the prosecution's case.

It is by means of horizontal control, i.e. the objections raised by the prosecution to questions put by the defence in this regard, that invasions of the victim's privacy that are not relevant to the discussion of the facts of the case could be avoided (article 397 of the Code of Criminal Procedure: "The person presiding over the interrogation shall moderate the interrogation, prevent the witness from answering trick, suggestive or impertinent questions and ensure that the interrogation is conducted without undue pressure and without offending the dignity of the person"). Likewise, by way of incidences, before the evidentiary relief, duly founded and based on the supranational norm, the Prosecutors, knowing of an illegal evidence previously admitted by the Judge of Guarantees that violates the privacy of the victim and is not pertinent to the purposes of the process, denounce it as such and insist that it be excluded or during the debate, attempt to be more vigilant in protecting the victim's rights to personal dignity, when the defence is following a line of questioning aimed at discovering aspects of this person's privacy which, although unrelated to the facts of the case under discussion, clearly seek to decompensate and embarrass him or her and finally discredit him or her as a witness for the prosecution (Article 397 of the Procedural Code).

In our system of criminal procedure, judges do not question the victim about the facts of the case.

20. Are there any criminal procedure law provisions to prevent revictimization during prosecution and court hearings?

A.: YES. Article 391 of the Code of Criminal Procedure clearly provides, for example, for the use of closed circuit or the Gesell camera when referring to

the testimony of a person in a condition of vulnerability or when a minor is involved. These testimonies have also been used in the form of a jurisdictional advance of evidence (Article 279 of the Criminal Procedural Code), to avoid the victim having to appear at the trial, which usually takes place about a year after the complaint, undoubtedly more in line with his or her reality and that of the process, as the Brasilia Rules rightly state in their April 2018 update.

Conflict/War

21. Is rape a war crime or a crime against humanity?

A.: YES, in article 441, paragraph 7, under Title IV, "Crimes against Humanity", Chapter I "Crimes against International Human Rights Law".

22. Is there a statute of limitations for the prosecution of violations in war or in conflict contexts?

A: No. These crimes are imprescriptible by virtue of the express mandate of article 121 of the Penal Code.

23. Are there any explicit provisions that exclude statutes of limitation for violations committed during war and armed conflict?

A.: YES, as indicated above, Article 121 of the Penal Code, which states: "The statute of limitations shall not apply to the crimes of terrorism, crimes against humanity and crimes of forced disappearance of persons.

24. Has the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) been ratified?

A.: YES, it has been enacted in Official Gazette 24512 which promulgates Law 14 of March 13, 2002 with its subsequent amendments.

DATA

25. Please provide data on the number of rape cases reported, prosecuted, and sanctioned during the 2 to 5 years.

OTHER

26. Please explain the particular and additional barriers to reporting and prosecuting violations and the responsibility of the perpetrators in their legal and social context not covered by the above. The system has not

internalized the standard of enhanced due diligence in these cases, which is the obligation of all State agents to observe it from the beginning of the investigation in the reception of the complaint by whatever means. The stages of the process follow one after the other, without applying a biased and sensitive gender and child perspective, which in these cases of violations would require, at a minimum, the immediate implementation of advance evidence of the victim's testimony, whether adult or minor, to avoid the secondary victimisation that occurs as a result of the constant re-victimisation of the experiences of the crime, which he or she must endure because there is a constant risk that he or she will arrive at the trial without having generated "credible" information, that he or she will "convince", because in front of the accuser, he or she will be presumed mendacious, he or she will be innocent and he or she must do what he or she can to be believed. Generally, when he or she leaves the trial, if he or she gets there, he or she goes empty-handed to make dignified and transformative reparations and take charge of the rest of his or her life, trying to forget because the assistance services provided by the State depend to a great extent on his or her having social security, if he or she pays for it or his or her parents, if not, therapy has a cost in a health center crowded with patients who come for all kinds of unimaginable reasons, since positive discrimination for these victims is a non-uniform slope to public health policies committed to adopting these minimal care measures for survivors of sexual violence. Nor is their reinsertion in school assured, when they are minors, in the area where they have had to move if the perpetrator is released under precautionary measures other than provisional detention during the process, or, has been threatened in the neighborhood by family members who know where he or she lives. The police do not have sufficient resources to assume responsibility for the care of victims and witnesses who have been threatened with death until the trial. The Prosecutor's Office does not have resources for this either. That's why we're promoting the adoption of more regular follow-up measures for these protection measures so that they do not expire after 6 months and that the prosecutors maintain communication like the psychologists from the Victims and Witnesses Protection Unit, like the other interveners (UPAVIT), make an extra effort so that even through phone calls we do the accompaniment as a team and they don't feel, as they actually express it, The first stories and forensic medical examinations are used and then forgotten, only to be reminded that the end of the investigation has been reached and that the intermediate stage is now underway, where the perpetrator will be charged or that, because the evidence is insufficient, it will not be passed and we will promote the dismissal of the process, or a plea agreement will be made and the victim will be told how many years in prison with or without replacement by a less severe one, such as community work if the victim is of age. It should be

noted that, under article 220 of the Code of Criminal Procedure, penalty agreements are concluded between the perpetrator and his or her defence and the Office of the Public Prosecutor; the opinion of the victim is not binding and the victim must be informed of it, but that is as far as it goes. Another barrier to victims' rights in the process is the vulnerability of, for example, those who are part of a minority ethnic group or have a different gender identity. The principle of equality that provides that in reality you are equal before the law, in treatment and response, is not fulfilled; nor is the principle of non-discrimination and absolute respect for the personal dignity of all parties in the process, not only for the accused but also for the person who accuses him, with all the risks involved in doing so before an audience of strangers, which includes all those called upon to participate in the investigation, doctors, psychologists, criminal investigation experts, those who intervene on behalf of the other party, the Public Prosecutor's Office, the defence, the complainant, the Guarantee and Trial Court judges, the Appeals Court if that is where it comes in, and even the Court of Cassation if this extraordinary appeal against the sentence is attempted.

CERTIFICATION: This is, in my opinion, a faithful translation of a document originally written in Spanish done by me, Anaxímenes González, bilingual translator of the Superior Office of the Prosecutor of International Affairs of the Public Ministry, today Friday, June 1, 2020 at 08:01 a.m.).

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anaxímenes González".



PUBLIC MINISTRY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

CHART 1. NUMBER OF REGISTERED COMPLAINTS UNDER ART. 174 RAPE AND ART. 175 DOUBLY AGGRAVATED RAPE,
AT THE NATIONAL LEVEL; BY YEAR
FROM 1 JANUARY 2016 TO 30 APRIL 2020 (P)

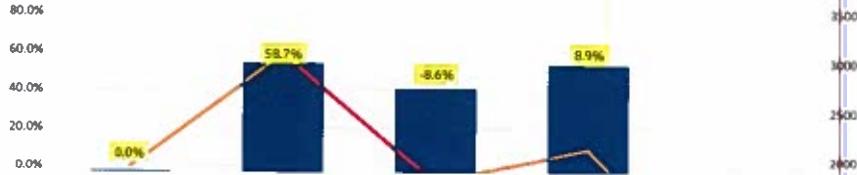
YEAR	AMOUNT	PERCENTAGE VARIATION
TOTAL...	11227	-
2016	1882	-
2017	2986	58.7%
2018	2729	-8.6%
2019	2971	8.9%
2020	659	-77.8%

(P) It refers to preliminary data.

Source: Center of Statistics, Public Ministry / SPA Platform and Inquisitorial System / Adolescents

PUBLIC MINISTRY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

GRAFIC 1. NUMBER OF REGISTERED COMPLAINTS UNDER ART. 174 RAPE Y ART. 175 DOUBLY AGGRAVATED RAPE, AT NATIONAL LEVEL; BY YEAR
FROM 1 JANUARY OF 2016 TO 30 APRIL 2020 (P)





Source: Center of Statistics, Public Ministry / SPA Platform and Inquisitorial System / Adolescents



PUBLIC MINISTRY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

CHART 2. NUMBER OF RECORDED CHARGES OF ART. 174 RAPE Y ART. 175 DOUBLY AGGRAVATED RAPE, AT NATIONAL LEVEL; BY YEAR
FROM 2 SEPTEMBER 2016 TO 30 APRIL 2020 (P)

YEAR (1)	AMOUNT (1)	PERCENTAGE VARIATION
TOTAL..	1710	-
2016	56	-
2017	284	407%
2018	438	54%
2019	776	77%
2020	156	-80%

(P) It refers to preliminary data.

(1) The figures for impurities are per person.

Source: Center of Statistics, Public Ministry / SPA Platform and Inquisitorial System / Adolescents

PUBLIC MINISTRY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
GRAPHIC 2. NUMBER OF RECORDED CHARGES OF ART. 174 RAPE AND ART. 175 DOUBLY AGGRAVATED RAPE,
AT NATIONAL LEVEL; BY YEAR
FROM 2 SEPTIEMBRE 2016 TO 30 APRIL 2020 (P)



Source: Center of Statistics, Public Ministry / SPA Platform and Inquisitorial System / Adolescents



PUBLIC MINISTRY

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

CHART 3. NUMBER OF RECORDED SENTENCES OF ART. 174 RAPE AND ART. 175 DOUBLY AGGRAVATED RAPE, AT NATIONAL LEVEL, BY COURT'S DECISION ; BY YEAR
2 SEPTIEMBRE 2016 TO 30 APRIL 2020 (P)

YEAR	AMOUNT	PERCENTAGE VARIATION	COURT'S DECISION	
			GUILTY	NOT GUILTY
TOTAL...	936	-	851	85
2016	51	-	46	5
2017	131	157%	130	1
2018	222	69%	192	30
2019	412	86%	372	40
2020	120	-71%	111	9

(P) It refers to preliminary data.

Source: Center of Statistics, Public Ministry / SPA Platform and Inquisitorial System / Adolescents



PUBLIC MINISTRY

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

**Chart 1 . COMPARATIVE OF REGISTERED COMPLAINTS OF THE CRIME AGAINST FREEDOM AND SEXUAL INTEGRITY.
REPUBLIC OF PANAMA, ADVERSARIAL CRIMINAL SYSTEM: PER MONTH; ACCORDING TO GEOGRAPHICAL AREA
YEAR 2019-2020 (P)**

GEOGRAPHICAL AREA	MONTHS (2)										TOTAL		PERCENTAGE VARIATION 2019-2020 (3)
	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	
Total	221	252	207	241	130	213	213	224	172	135	209	172	-3%
Bocas Del Toro	66	39	43	42	50	23	31	19	47	28	237	151	-35%
Chiriquí	50	60	63	60	51	48	52	16	54	30	267	214	-20%
Coclé	56	51	40	46	25	21	41	9	40	11	202	138	-32%
Colón	28	34	30	22	18	6	29	10	32	12	137	86	-37%
Comarca Emberá	2	3	1	2	1	2	1	1	1	0	6	8	33%
Comarca Kuna Yala	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	4	300%
Comarca Ngöbe Buglé	27	41	39	17	17	14	14	6	27	12	105	90	-14%
Darién	16	12	15	9	16	7	23	4	9	4	79	36	-54%
Herrera	9	13	16	19	14	8	10	2	19	10	68	52	-24%
Los Santos	8	20	21	9	17	4	7	2	17	5	70	40	-43%
Panamá	113	150	125	128	96	95	97	27	105	68	536	448	-13%
San Miguelito	45	37	46	48	26	19	40	11	33	18	190	133	-30%
Panamá Oeste	77	84	64	75	64	39	76	18	68	27	349	243	-30%
Vergel	27	28	22	33	15	21	22	7	30	20	116	109	-6%

Notes:

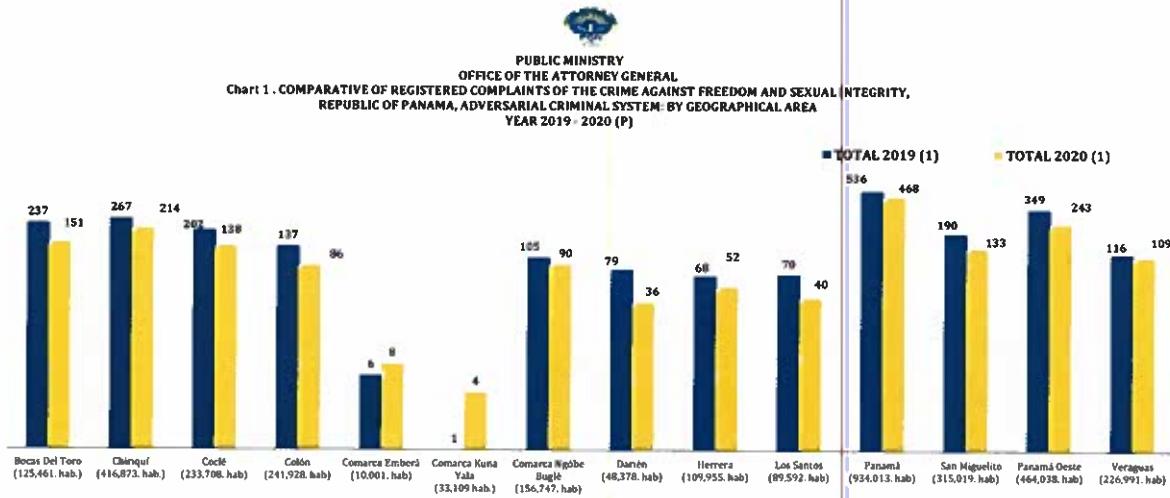
(P) Refers to preliminary data.

(1) The complaints received are from January 1 to May 31, 2019 and from January 1 to May 28, 2020

(2) Figures for March, April and May 2019 and 2020, are only for Adults, not including Adolescents and Juiced System.

(3) We can observe that the percentage variation reflected in this Table is the difference between the years, 2019 and 2020, register a circumstantial decrease of 25 percent, referring to the year 2019.

Source: Statistics Center of the Public Ministry, National Institute of Statistics and Census of the General Comptroller's Office of the Republic of Panama



Source: Statistics Center of the Public Ministry, National Institute of Statistics and Census of the General Comptroller's Office of the Republic of Panama.
The comparison is from January 1 to May 31, 2019 and from January 1 to May 28, 2020.